



Lehiaren
Euskal Agintaritza
Autoridad Vasca
de la Competencia

INFORME DE LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA REFERENTE A LOS ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ÁLAVA

Pleno

Dña. María Pilar Canedo Arrillaga, Presidente

Dña. Natividad Goñi Urriza, Vocal

D. Rafael Iturriaga Nieva, Vocal

Secretario: D. Ibon Alvarez Casado

Sumario:

I. ANTECEDENTES	1
II. COMPETENCIA DE LA AVC Y CONSIDERACIONES JURÍDICAS PREVIAS	2
III. CONSIDERACIONES A LA VISTA DE LA NORMATIVA DE COMPETENCIA	4
A. Colegiación	4
a. Obligatoriedad	4
b. Titulación	7
c. Requisitos	8
d. Tramitación	9
B. La Colegiación única para todo el territorio nacional	9
C. Honorarios	10
a. Servicio colegial de cobro de honorarios.....	10
b. Informes sobre honorarios y fijación indirecta de precios	11
D. Visado.....	12
a. La exigencia de visado	13
b. El coste	15
E. Competencia desleal de los colegiados entre si	15
F. El Colegio como competencia desleal a los colegiados.....	16
G. Recursos económicos del colegio.....	18
H. Asignación de encargos a los Colegiados a través del Colegio	19
I. Responsabilidad por trabajos incorrectamente realizados	20
a. Seguros de responsabilidad civil	20
b. Responsabilidad del Colegio	21
J. Otras funciones del Colegio	21
IV. CONCLUSIONES	22

El Pleno del Consejo Vasco de la Competencia (en adelante CVC), en su reunión del 17 de diciembre de 2013, con la composición ya indicada, ha decidido emitir el presente informe en relación con los Estatutos del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Álava.

I. ANTECEDENTES

1. El 4 de febrero de 2013 tuvo entrada en esta Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) un escrito de la Dirección de Registros Administrativos y de Régimen Local del



Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco al que se adjuntaba copia de la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales Álava (en adelante ECOITIA), a efectos de que se informe sobre su adecuación a la normativa vigente en materia de defensa de la competencia.

II. COMPETENCIA DE LA AVC Y CONSIDERACIONES JURÍDICAS PREVIAS

2. El presente informe se emite en virtud de la competencia que la Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la Competencia, en su artículos 3.3 y 10.n, otorga a este organismo en materia de promoción. Esta función pretende fomentar -y en la medida de lo posible garantizar- la competencia efectiva en los mercados vascos por medio de acciones no sancionadoras, dentro de las cuales destaca la relación con las administraciones públicas.

3. La regulación de los Colegios Profesionales tiene en nuestro ordenamiento jurídico base constitucional. El artículo 36 CE establece que “la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.”

La premisa de la que debemos partir es que el ejercicio de las profesiones colegiadas se debe realizar en régimen de libre competencia y está sujeto en su totalidad a la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (en adelante LDC)¹. El sometimiento a la normativa de competencia se ha puesto más de manifiesto tras las recientes modificaciones normativas que derivan de la aplicación de la Directiva de Servicios comunitaria². La normativa de colegios profesionales se basa tanto en el Estado como en la CAE en una regulación previa a esta Directiva: la Ley estatal de Colegios Profesionales de 1974 (en adelante LCP) y la Ley 18/1997 de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales del País Vasco (en adelante LVC)³. Sin embargo, existen en este momento numerosas normas estatales y autonómicas de transposición de la Directiva que han supuesto cambios en esas normas y, en consecuencia, en el régimen de funcionamiento de los Colegios profesionales, fundamentalmente las conocidas como Ley Paraguas (17/2009) y Ley Ómnibus (25/2009) o, en la CAE, la Ley 7/2012⁴.

¹ Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

² Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

³ Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. Ley 7/1997, de 14 de abril de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales, Ley vasca 18/1997, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales.

⁴ Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (denominada Ley paraguas); Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (denominada Ley Ómnibus) y Ley del Parlamento Vasco, 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la directiva de servicios en el mercado



La LVC “tiene por objeto la regulación del ejercicio de las profesiones tituladas que tenga lugar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como de los colegios y consejos profesionales cuya actuación se desarrolla dentro de dicho ámbito territorial, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación básica y/o sectorial”. En su Exposición de Motivos se recoge que su regulación se realiza en ejercicio de las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma, pero sin perjuicio del artículo 139 de la CE. Este precepto constitucional establece que “ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.”

Por ello, el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Álava está regido por lo que se establece en la LVC, en su texto vigente tras las modificaciones realizadas en 2012 para adaptarse a la normativa comunitaria. La Disposición Adicional 9ª de esta norma establece que “los artículos de esta Ley que reproducen total o parcialmente los preceptos por los que se regulan las bases del régimen de colegios profesionales se han incorporado a este texto por razones de sistemática legislativa. En consecuencia, se entenderán modificados en el momento en que se produzca la revisión de aquéllos en la normativa básica mencionada.”

4. El sometimiento de los Colegios a la normativa no se limita al texto literal de los Estatutos u otras normas del Colegio (como los reglamentos de régimen interno, los procedimientos establecidos o la normativa deontológica) sino que se extiende a toda la actuación colegial. Por ello, independientemente del texto de sus Estatutos, el Colegio no deberá adoptar decisiones, recomendaciones o imponer obligaciones y requisitos que limiten la competencia, dado que éstas podrían ser constitutivas de infracción en materia de defensa de la competencia⁵.

5. Este informe sobre los ECOITIA se ha estructurado atendiendo a categorías materiales y no sigue por tanto el orden del articulado. Sin embargo, y en aras de una mayor claridad, en cada epígrafe se recoge una referencia a los textos normativos de base, los preceptos de los ECOITIA afectados y un juicio de valor al respecto.

Debe indicarse igualmente que la AVC realizará dos tipos de recomendaciones en este informe: aquéllas que ponen de manifiesto una posible vulneración normativa y aquéllas en las que los ECOITIA optan por una vía no frontalmente contraria a la legislación vigente, pero en la que pueden existir opciones alternativas menos lesivas para la competencia, en cuyo caso se propondrán esas alternativas que se consideran más beneficiosas para el interés público.

interior, que modifica la Ley vasca 18/1997, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales.

⁵ COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA, *Informe sobre los Colegios Profesionales tras la transposición de la Directiva de Servicios*, Madrid, 2011. pp. 22 y ss.



III. CONSIDERACIONES A LA VISTA DE LA NORMATIVA DE COMPETENCIA

A. Colegiación

a. Obligatoriedad

6. El artículo 36 CE que recoge la regulación constitucional sobre los Colegios ha sido objeto de interpretación por el Tribunal Constitucional (TC) que ha establecido que la colegiación obligatoria “solo será constitucionalmente lícita cuando esté justificada por la necesidad de servir a un interés público”⁶. El TC habilita por tanto **al legislador** para, si lo estima oportuno, configurar los Colegios profesionales en unos términos que pueden restringir las libertades de asociación y de elección de oficio –y en particular imponiendo la obligación de colegiación-, siempre que así se justifique por los intereses públicos vinculados a determinadas profesiones⁷.

La Ley Paraguas, norma que transpone la Directiva 2006/123 de Servicios, permite excepcionalmente la colegiación obligatoria cuando concurren las siguientes circunstancias:

- que esté justificada por razones de orden público, seguridad pública, de salud pública o de protección del medio ambiente. (artículo 12)
- que la exigencia sea no discriminatoria (es decir, que no resulte discriminatoria ni directa ni indirectamente en función de la nacionalidad o del establecimiento en el territorio de la Autoridad competente). (artículo 5)
- que sea necesaria (es decir, que esté justificada por una razón imperiosa de interés general). (artículo 5)
- que sea proporcionada al fin que pretende (es decir, que la colegiación sea el instrumento más adecuado para garantizar la consecución del objetivo que se persigue porque no existen otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado). (artículo 5)
- que esté suficientemente motivada en la ley que establezca dicho régimen. (artículo 5)

En la Comunidad Autónoma Vasca, la posibilidad de exigir la incorporación a un colegio profesional para el ejercicio de una profesión está regulada por el artículo 30.1 de la LVC. Esta disposición establece que “es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas la incorporación al colegio correspondiente **cuando así lo establezca la pertinente Ley**”⁸. Por lo tanto tan solo se puede considerar ajustada a

⁶ STC 89/1989 de 11 de mayo. En el mismo sentido puede consultarse la STC 330/1994, de 15 de diciembre, que permite los Colegios de adscripción voluntaria o la STC 76/2003, de 23 de abril, que declara inconstitucional la colegiación obligatoria respecto de Colegios de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local por no desarrollar fines o funciones públicas constitucionalmente relevantes en relación con la ordenación de la profesión.

⁷ Véase igualmente fuera de nuestras fronteras la Sentencia del TEDH de 10 de febrero de 1983. *As. Le Compte, Van Leuven y De Meyere c. Bélgica*, o la Sentencia de 30 de junio de 1993, *Sigurdur A. Sigurjónsson c. Islandia* Serie A, número 264, declarando desproporcionada la obligación legal que se impone a un taxista de afiliarse a una organización de conductores del taxi.

⁸ La STC 3/2013, de 17 de enero de 2013, BOE, nº 37 de 12 de febrero de 2013, sobre la ley de colegios profesionales andaluza, en la que se establece que es competencia exclusiva del



derecho la obligatoriedad de la colegiación cuando ésta se recoja en una norma con rango de ley.

Además, las obligaciones de colegiación deben estar establecidas en una norma con rango de ley para poder gozar del amparo del art. 4 de LDC⁹.

La Ley Ómnibus eliminó, en general, las restricciones al acceso y al ejercicio profesional pero dejó pendiente de una normativa futura la reforma de las reservas de actividad y de la colegiación obligatoria¹⁰. En este momento, el artículo 3.2 de la LCP, admite únicamente la posibilidad de requerir de forma indispensable la colegiación para el ejercicio de una profesión cuando así lo establezca una ley estatal. No obstante, en tanto no se regulen por ley las profesiones para las que resulte obligatoria la colegiación, y de acuerdo con la Disposición transitoria cuarta de la Ley Ómnibus, se consolidan las colegiaciones obligatorias vigentes a su fecha de entrada en vigor. Por ello, transitoriamente, se mantiene la legalidad de situaciones de colegiación obligatoria preexistentes no establecidas en norma con el rango adecuado.

7. La constitución del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial tuvo su origen en el Decreto de 22 de junio de 1956 (B.O.E. de 22 de julio), por el que se autorizó la constitución de los Colegios de Peritos Industriales, lo que determinó que por Orden de 16 de octubre de 1957 del Ministerio de Industria (B.O.E. de 1 de marzo de 1958) se creasen los Colegios de Peritos Industriales y se aprobasen los primeros Estatutos Generales de los Colegios de Peritos Industriales.

El artículo 7 del Real Decreto 104/2003, de 24 de enero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales y de su Consejo General establece que "(...) Para el ejercicio de la profesión, tanto libre como por cuenta ajena o en cualquier forma, será obligatorio estar incorporado al correspondiente Colegio." La base de la citada obligatoriedad no es por tanto una Ley sino un Real Decreto con rango reglamentario.

Estado fijar la colegiación obligatoria y también fijar las excepciones. En idéntico sentido se ha pronunciado sobre la ley extremeña la STC 46/2013 y sobre la ley asturiana la STC 50/2013.

⁹ El citado artículo 4 establece, bajo el epígrafe "Conductas exentas por ley", que "sin perjuicio de la eventual aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de defensa de la competencia, las prohibiciones del presente capítulo no se aplicarán a las conductas que resulten de la aplicación de una ley." Sin embargo, continúa diciendo el artículo "Las prohibiciones del presente capítulo se aplicarán a las situaciones de restricción de competencia que se deriven del ejercicio de otras potestades administrativas o sean causadas por la actuación de los poderes públicos o las empresas públicas sin dicho amparo legal".

¹⁰ La Disposición Transitoria cuarta de la citada norma establece que "En el plazo máximo de doce meses, el Gobierno remitiría a las Cortes Generales un proyecto de ley que determinase las profesiones para cuyo ejercicio será obligatoria la colegiación, remisión que aún no se ha materializado. Dicho proyecto deberá prever la continuidad de la obligación de colegiación en aquellos casos y supuestos de ejercicio en que se fundamente como instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios y en aquellas actividades en que pueden verse afectadas, de manera grave y directa, materias de especial interés público, como pueden ser la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas."



El Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Álava se constituye por segregación del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Bilbao, por medio del Real Decreto 2120/1981, de 5 de junio¹¹.

8. En los ECOITIA la cuestión de la colegiación obligatoria se aborda en el último inciso del siguiente precepto:

Artículo 2. De los Colegiados.

1. El Colegio Oficial de Peritos, Ingenieros Técnicos y Graduados en Ingeniería de la rama industrial de Álava estará integrado por los Graduados en Ingeniería de la rama Industrial, los titulados Ingenieros Técnicos de la misma rama con arreglo a los planes de estudios anteriores al Real Decreto 1497/1987, de 27 de Noviembre, o conforme a los Reales Decretos 1462/1990, de 26 de Octubre y 1402/1992, 1403/1992, 1404/1992 y 1406/1992, todos ellos de 20 de Noviembre y los Peritos Industriales, siempre que estén en posesión del correspondiente título oficial reconocido por el Estado, que lo soliciten y cumplan los demás requisitos exigidos por los presentes Estatutos, y obligatoriamente, a los que se dediquen al ejercicio de la profesión y estén radicados profesionalmente dentro del ámbito territorial que comprende el Colegio.

9. La obligación de colegiación supone una reserva de actividad para los profesionales que, ostentando una determinada titulación, deben estar además colegiados. Esa reserva en exclusiva del ejercicio de una profesión para los profesionales colegiados supone una barrera de entrada frente a terceros que, en principio, perjudica a otros competidores y a los consumidores¹².

Se verifica que los ECOITIA consideran la colegiación como una obligación para ejercer la profesión de ingeniero técnico industrial. De todo lo que antecede cabe deducir sin embargo que la colegiación obligatoria de los ingenieros técnicos industriales mantiene su vigencia transitoriamente, en aplicación de la Disposición transitoria cuarta de la Ley Ómnibus ya que, aun no estando recogida en una norma estatal con rango de Ley, se consolida la vigencia del artículo 7 del Real Decreto 104/2003 que ya recogía la colegiación obligatoria.

No obstante, cualquier modificación de los Estatutos colegiales que se vaya a llevar a cabo antes de que se proceda a la modificación normativa, debe o bien evitar las referencias a la obligación de colegiación o bien incluir una referencia a que dicha obligación refleja lo establecido en una norma de rango no adecuado a la legislación y que es transitoria hasta el momento que dicha exigencia se incluya en una norma con rango de ley¹³.

Por tanto, debe optarse por una de estas posibilidades:

- bien suprimir del artículo 2 cualquier referencia a la obligatoriedad de la colegiación.
- bien realizar una referencia expresa a que la obligación de colegiación se recoge en una norma con rango de Real Decreto y por tanto su vigencia es transitoria en

¹¹ B.O.E. de 21 de septiembre de 1981.

¹² Informe de la CNC, *cit.* p. 42.

¹³ Informe de la CNC, p. 44.



aplicación de la Disposición transitoria cuarta de la Ley Ómnibus. En este caso debería el Colegio proceder a modificar sus Estatutos en el momento en que se adoptara la normativa que transpone a este punto la Directiva de Servicios comunitaria.

b. Titulación

10. El artículo 2 de los ECOITIA relaciona las titulaciones concretas que darán acceso a la colegiación:

Artículo 2. De los Colegiados.

1. El Colegio Oficial de Peritos, Ingenieros Técnicos y Graduados en Ingeniería de la rama industrial de Álava estará integrado por los Graduados en Ingeniería de la rama Industrial, los titulados Ingenieros Técnicos de la misma rama con arreglo a los planes de estudios anteriores al Real Decreto 1497/1987, de 27 de Noviembre, o conforme a los Reales Decretos 1462/1990, de 26 de Octubre y 1402/1992, 1403/1992, 1404/1992 y 1406/1992, todos ellos de 20 de Noviembre y los Peritos Industriales, siempre que estén en posesión del correspondiente título oficial reconocido por el Estado, que lo soliciten y cumplan los demás requisitos exigidos por los presentes Estatutos, y obligatoriamente, a los que se dediquen al ejercicio de la profesión y estén radicados profesionalmente dentro del ámbito territorial que comprende el Colegio.

11. Respecto a la exigencia de estar en posesión de titulaciones concretas para tener acceso a la colegiación debe tenerse en cuenta la modificación operada en las enseñanzas oficiales en virtud del llamado proceso de Bolonia, que tuvo como consecuencia la desaparición del “catálogo de titulaciones” e incorporó la posibilidad de la creación de nuevos títulos universitarios por las universidades. Así, desde el año 2010 las propias universidades pueden crear y proponer las enseñanzas y títulos que hayan de impartir y expedir, sin sujeción a la existencia de un catálogo previo establecido por el Gobierno, por lo que vincular a priori el acceso a la colegiación a un catálogo de titulaciones determinado no estaría justificado¹⁴.

¹⁴ Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades:

“Artículo 35. Títulos oficiales.

1. El Gobierno establecerá las directrices y las condiciones para la obtención de los títulos universitarios de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional, que serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la universidad.

2. Para impartir enseñanzas oficiales y expedir los correspondientes títulos oficiales, con validez en todo el territorio nacional, las universidades deberán poseer la autorización pertinente de la Comunidad Autónoma, según lo dispuesto en la legislación de la misma y lo previsto en el artículo 8 de esta Ley, y obtener la verificación del Consejo de Universidades de que el oportuno plan de estudios se ajusta a las directrices y condiciones establecidas por el Gobierno. El procedimiento deberá preservar la autonomía académica de las universidades.

3. Tras la autorización de la Comunidad Autónoma y la verificación del plan de estudios que otorgue el Consejo de Universidades, el Gobierno establecerá el carácter oficial del título y ordenará su inscripción en el Registro de universidades, centros y títulos.

4. Una vez que el Gobierno haya aprobado el carácter oficial de dicho título, el Rector ordenará publicar el plan de estudios en el Boletín Oficial del Estado y en el diario oficial de la Comunidad Autónoma.”



Si no se modifica la redacción dada en este apartado se estaría realizando una reserva de actividad para los profesionales en posesión de títulos universitarios habilitantes concretos, en detrimento de otros profesionales que pudiendo tener la capacidad técnica suficiente para el ejercicio de la actividad profesional pero que por carecer de las titulaciones relacionadas en el artículo no tendrían acceso a la colegiación. Esta restricción constituye una barrera de entrada especialmente perniciosa para la competencia en el supuesto de profesiones para cuyo ejercicio resulte imprescindible la colegiación obligatoria, como es el caso (al menos transitoriamente, en tanto no se promulgue la ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio sea obligatoria la colegiación, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición transitoria cuarta de la Ley Ómnibus).

12. Por cuanto antecede, se propone la modificación de la redacción dada al artículo para adaptarlo a la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, de tal manera que no se corra el riesgo de excluir del ejercicio de la actividad profesional a titulados con capacitación técnica suficiente para el ejercicio de la misma. Para ello se sugiere la redacción siguiente o similar: “El Colegio Oficial de Peritos, Ingenieros Técnicos y Graduados en Ingeniería de la rama industrial de Álava estará integrado por los Graduados en Ingeniería de la rama Industrial, los titulados Ingenieros Técnicos de la misma rama con arreglo a los planes de estudios anteriores al Real Decreto 1497/1987, de 27 de Noviembre, o conforme a los Reales Decretos 1462/1990, de 26 de Octubre y 1402/1992, 1403/1992, 1404/1992 y 1406/1992, todos ellos de 20 de Noviembre y los Peritos Industriales, o titulación declarada equivalente, siempre que estén en posesión del correspondiente título oficial reconocido por el Estado, que los soliciten y cumplan los demás requisitos exigidos por los presentes Estatutos, (...)”.

c. Requisitos

13. El artículo 33.3 de la LVC regula el contenido necesario que deben tener los Estatutos colegiales y, en su letra h, determina que deberán recoger los “requisitos para formalizar la adquisición y pérdida de la condición de colegiado”. Además, el artículo 39 de la LVC sobre la incorporación, establece que “los colegios profesionales incorporarán obligatoriamente a quien lo solicite, previa acreditación de que está en posesión del título legalmente requerido para el ejercicio de la profesión de que se trate y de los demás requisitos exigidos con carácter general en los estatutos y en las disposiciones que les sean de aplicación”.

14. En los ECOITIA los requisitos de colegiación se recogen en el artículo 4:

Artículo 4. Requisitos de colegiación.

Para poder adscribirse al Colegio, el interesado habrá de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley referentes al ejercicio de la actividad profesional titulada, que son:

- a) Estar en posesión del correspondiente título de acuerdo con la legislación vigente.
- b) No estar en situación de inhabilitación profesional.



- c) No estar incurso en las causas de incompatibilidad o prohibición que establezcan las Leyes.
- d) Cumplir con las normas de colegiación.

15. Las condiciones que deben cumplir quienes deseen colegiarse deberían estar claramente establecidas en los estatutos. Además, toda vez que la colegiación es un acto reglado por lo que no puede denegarse salvo que quien la solicite no cumpla los requisitos establecidos para ello, esos requisitos deberían estar previamente establecidos y ser públicos.

La imprecisión de de la letra d del artículo 4 puede generar inseguridad jurídica, por lo que se aconseja una de las siguientes posibilidades:

- que se suprima.
- que se concrete.

d. Tramitación

16. El artículo 50.2 de la LVC establece que los Colegios deberán disponer de los medios necesarios para que quienes deseen tramitar su colegiación por vía telemática puedan hacerlo: “Las organizaciones colegiales dispondrán de una página web para que, a través de la ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, las profesionales y los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, el ejercicio de su actividad profesional y su baja en el colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia, en las condiciones previstas en el artículo 18. 2 de la Ley 17/2009 mencionada.”

Consecuentemente, se aconseja al Colegio que en caso de que no haya adoptado las medidas necesarias para ajustarse a estas exigencias realice los trámites oportunos a los efectos.

B. La Colegiación única para todo el territorio nacional

17. Aunque la LVC, lógicamente, no establece regulación expresa sobre esta cuestión, sí recoge en su artículo 39.4 que “los colegios no podrán exigir a los profesionales y las profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de colegiación comunicación ni habilitación alguna, ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que exijan habitualmente a sus colegiados y colegiadas por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios o beneficiarias y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial”. Además debe tenerse en cuenta el artículo 139 de la CE y el artículo 3.3 de la LCP que, en aplicación de la normativa comunitaria, establece que si una profesión se organiza por colegios territoriales es suficiente con la incorporación a uno solo de ellos para poder ejercer la profesión en todo el territorio nacional.



18. En los ECOITIA la cuestión se regula en el segundo párrafo del artículo 3.

Artículo 3. Solicitudes de Incorporación.

(...)

El Colegio Oficial de Peritos, Ingenieros Técnicos y Graduados en Ingeniería de la rama Industrial de Álava no exigirá ni la incorporación a este Colegio ni habilitación alguna para ejercer en el Territorio Histórico de Álava a los Ingenieros Técnicos que ya estuvieran incorporados a uno solo de los Colegios existentes en el Territorio del Estado, que será el del domicilio profesional único o principal, sin que sea exigible el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que este Colegio exija habitualmente a sus colegiados por la prestación de servicios de los que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial, ello sin perjuicio de la obligación que puedan establecer los Estatutos Generales Estatales o Autonómicos referente a que sea comunicada al Colegio Oficial de Peritos, Ingenieros Técnicos y Graduados en Ingeniería de la rama Industrial de Álava la actuación profesional en este Territorio Histórico de Álava.

19. La afirmación recogida en el artículo 3 sobre la posibilidad de que mediante los Estatutos Generales, ya sean Estatales o Autonómicos, se pueda exigir la obligación de comunicar el ejercicio profesional al COITIA debe ser suprimida del apartado.

C. Honorarios

a. Servicio colegial de cobro de honorarios

20. La LVC establece en su artículo 24.f que son funciones propias de los Colegios “encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales a petición de los colegiados y en las condiciones que se determinen en los estatutos de cada colegio”. El artículo 5.p de la LCP establece entre las funciones de los colegios “encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales cuando el colegiado lo solicite libre y expresamente, en los casos en que el Colegio tenga creados los servicios adecuados y en las condiciones que se determinen en los Estatutos de cada Colegio”.

21. En los ECOITIA esta cuestión se regula en artículo 9:

Artículo 9. Las funciones generales del Colegio.

Son funciones generales propias del Colegio:

e) Asistir a los colegiados en las actuaciones precisas para la percepción de sus honorarios, cuando voluntariamente lo soliciten.

22. A este respecto es necesario recordar que la actuación del Colegio no deberá -ni directa ni indirectamente- ir dirigida a la fijación u orientación de precios. El denominado “servicio colegial de cobro de honorarios” se ha conceptualizado como un posible instrumento de control de la actividad de los colegiados por parte de los



colegios. Este servicio no puede ser por ello obligatorio sino que el profesional debe poder solicitarlo libre y expresamente, como bien recoge la redacción de los ECOITIA.

“El cobro de honorarios a través de los Colegios Profesionales presenta riesgos importantes de restricción de la competencia. Por un lado, si existe un acuerdo previo entre profesionales sobre los honorarios, un reparto de mercado o un acuerdo de compensación, la centralización de los cobros puede ser un mecanismo para controlar que los profesionales cumplen con el acuerdo. Por otro lado, aun en ausencia de un acuerdo anticompetitivo previo como los descritos, si un número importante de profesionales canaliza sus cobros a través del Colegio, la difusión de información sobre los cobros puede facilitar restricciones sobre la competencia”¹⁵.

Por todo ello y pese a la corrección de la redacción dada al apartado, se aconseja al COITIA que evite incurrir en comportamientos anticompetitivos cuando actúe en ejecución de la función correspondiente a esta materia.

b. Informes sobre honorarios y fijación indirecta de precios

23. La LVC establece en su artículo 24 que son funciones propias de los colegios “elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados. Dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que corresponden a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita” (letra e) y “emitir informe en los procesos judiciales en los que se discutan cuestiones relativas a honorarios profesionales” (letra f *in fine*)¹⁶.

24. En los ECOITIA la cuestión se regula en el artículo 9:

Artículo 9. Las funciones generales del Colegio.

Son funciones generales propias del Colegio:

f) Interpretar las dudas que pudieran surgir con referencia a la aplicación de honorarios a percibir por los profesionales a que hacer referencia en el Apartado 2.1 del Artículo 2º en sus actividades profesionales e incluso emitir los informes oportunos en los procesos judiciales y en los procedimientos administrativos en los que se discutan cuestiones relativas a honorarios profesionales.

25. La Ley Ómnibus suprimió la función de los Colegios recogida en el artículo 5 de la LCP referida al establecimiento de honorarios orientativos y recogió en su artículo 14¹⁷ una prohibición expresa al respecto. La única salvedad ha sido recogida en la

¹⁵ Informe de la CNC p. 73.

¹⁶ El artículo 5.o de la LCP se refiere a la función de “informar en los procedimientos judiciales o administrativos en que se discutan honorarios profesionales”.

¹⁷ Artículo 14 de la LCP: Prohibición de recomendaciones sobre honorarios. “Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en la Disposición adicional cuarta.”



Disposición adicional cuarta de la LCP, que establece la posibilidad de que los colegios elaboren “criterios orientativos” (que no baremos) a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados, criterios que también serán válidos para el cálculo de honorarios y derechos que correspondan a los efectos de tasación de costas en la asistencia jurídica gratuita.

26. Toda vez que el ejercicio de la profesión debe realizarse en régimen de libre competencia, lo que incluye que el establecimiento de la remuneración de los honorarios debe ser libre, el Colegio no debería reservarse ninguna función referida a la interpretación de los mismos, máxime teniendo en cuenta el riesgo que puede suponer el que los integrantes del colegio conozcan la política de precios que están llevando sus competidores. Esto podría favorecer un alineamiento en el importe de los honorarios a cobrar al cliente, en detrimento de uno de los aspectos más importantes de la competencia y que más beneficios reporta al consumidor, como es el precio¹⁸.

Por cuanto antecede, se propone la supresión de la primera parte del párrafo, “Interpretar las dudas que pudieran surgir con referencia a la aplicación de honorarios a percibir por los profesionales a los que se hace referencia en el Apartado 2.1 del Artículo 2º en sus actividades profesionales, e incluso”.

27. Respecto al último inciso del apartado, la función de emitir de informes en procedimientos judiciales o administrativos en que se discutan honorarios profesionales, señalar que coincide con la función recogida en la letra o del artículo 5 de la LCP, por lo se ajusta a derecho.

28. No obstante, y con respecto al establecimiento de criterios para la tasación de costas debe en primer lugar matizarse que la norma hace referencia tan solo a “criterios” orientativos y no a “baremos” orientativos. Los criterios orientativos se definen como “el conjunto de elementos que han de tenerse en cuenta para la tasación de costas”¹⁹. No puede considerarse que constituya un “criterio” el resultado cuantitativo que se obtiene de aplicar dichos elementos a cada caso concreto. En ese caso nos encontraríamos ante lo que podría conceptuarse como precio u honorario y en consecuencia en una práctica prohibida.

D. Visado

29. El artículo 24 de la LVC regula las funciones propias de los Colegios. En su letra i establece como una de ellas “en relación con las profesiones técnicas, visar los trabajos profesionales en su ámbito de competencia **únicamente cuando se solicite por petición expresa de las clientes y los clientes**, incluidas las administraciones públicas cuando actúen como tales, o cuando así se establezca en la **normativa vigente**. El **objeto** del visado es comprobar al menos la identidad y habilitación profesional de la persona autora del trabajo, así como la corrección e integridad formal

¹⁸ Artículo 2.1 de la LCP: “El ejercicio de las profesiones colegiadas se realizará en régimen de libre competencia y estará sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su remuneración, a la Ley sobre Defensa de la Competencia y a la Ley sobre Competencia Desleal.”

¹⁹ Informe CNC p. 71.



de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable al trabajo de que se trate. El visado debe responder a las exigencias de claridad en cuanto a su objeto, extremos sometidos a control y responsabilidad que asume el colegio. El visado no comprenderá en ningún caso los honorarios ni las condiciones contractuales, que deberán ser fijadas dentro del acuerdo entre las partes; tampoco comprenderá el control técnico de los elementos facultativos del trabajo profesional. En aquellos casos en que el visado colegial sea preceptivo, su coste será razonable, no abusivo ni discriminatorio. Los colegios deberán someter a publicidad el coste del visado, que podrá tramitarse por vía telemática²⁰.

30. En los ECOITIA la cuestión se regula en los artículos 9.I; 15.5; 19.j y 48:

Artículo 9. Las funciones generales del Colegio.

I. Visar los trabajos profesionales de los colegiados de conformidad con lo establecido en el artículo 46º de los presentes Estatutos.

Artículo 15. Recursos Ordinarios.

5. El porcentaje que por derecho de visado o verificación técnica documental, de trabajos profesionales señale el Colegio.

Artículo 19. Obligaciones de los colegiados.

j. Someter al visado del Colegio toda la documentación técnica o facultativa, proyecto, informes o cualesquiera otros trabajos que suscriba en el ejercicio de su profesión, cualquiera que sea el cliente o destinatario de aquellos, en los casos y términos previstos en la legislación vigente.

Artículo 48. Función de la Junta de Gobierno.

Será función propia de la Junta de Gobierno, por sí o a través de la Comisión de Ejercicio Libre de la Profesión o de la Secretaría Técnica del Colegio, la legalización, registro y visado de los trabajos y documentos de carácter profesional que los Peritos Industriales, Ingenieros Técnicos Industriales y titulados universitarios de Grado deban presentar en los Organismos o Entidades de carácter oficial o privado.

El visado acreditará, en todo caso la autoría del trabajo y la titulación, competencia y habilitación del autor, así como el contenido formal del mismo, además de cuantos aspectos no vulneren la legislación vigente. El visado no comprenderá los honorarios ni las demás condiciones contractuales, cuya determinación se deja al libre acuerdo de las partes.

a. La exigencia de visado

31. Como consideración previa señalar que el artículo 46 al que hace referencia el artículo 9.I de los ECOITIA se refiere a la Constitución de las Juntas Generales, por lo que parece se trata de un error. Debería corregirse y poner en su lugar el 48º.

32. Sobre la redacción dada al artículo 48 cabe realizar varias observaciones. En el artículo se ha acotado que el Colegio visará los trabajos y documentos de carácter profesional que realicen los "Peritos Industriales, Ingenieros Técnicos Industriales y titulados universitarios de Grado", es decir, únicamente los que realicen los profesionales que ostenten dichas titulaciones. Sin embargo, toda vez que, por una

²⁰ En el mismo sentido el artículo 13.1 LCP.



parte, en el caso de visado de trabajos con proyectos parciales, tal y como se contempla en el artículo 3 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial Obligatorio (en adelante, Real Decreto sobre Visados) es suficiente con que el visado lo realice por la totalidad el Colegio competente en la materia principal y, por otra, existen materias para cuyo conocimiento tienen competencia varios colegios profesionales, pudiendo el profesional dirigirse a cualquiera de ellos, tal y como dispone el artículo 5.1 del Real Decreto sobre Visados, debería modificarse la redacción dada a este apartado de tal forma que no se acote los trabajos profesionales a visar en función de la titulación de quien los presenta o realiza.²¹

33. El segundo párrafo del artículo no ha incorporado todas las prescripciones señaladas en el artículo 24. i de la LVC.

Toda vez que se ha optado por incluir en los estatutos el contenido de los visados, se aconseja incluir todos los términos establecidos en la Ley y no sólo una parte de ellos, por lo que debería recogerse también:

- que tiene por objeto comprobar la corrección de la documentación.
- que deberá expresar claramente su objeto.
- que deberá detallar claramente qué extremos son sometidos a su control
- responsabilidad que asume el Colegio
- que no comprenderá el control de los elementos técnicos facultativos

34. El artículo 19. j sobre Obligaciones de los colegiados señala “Someter al visado del Colegio toda la documentación técnica o facultativa, proyecto, informes o cualesquiera otros trabajos que suscriba en el ejercicio de su profesión, cualquiera que sea el cliente o destinatario de aquellos, en los casos y términos previstos en la legislación vigente”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.i los colegios únicamente podrán visar lo trabajos profesionales que voluntariamente soliciten expresamente los clientes o cuando así se establezca en la normativa vigente.

La normativa actualmente en vigor es el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial Obligatorio, donde se determinó, en base a existencia de relación de causalidad directa entre el trabajo y la afectación a la integridad física y seguridad de las personas y por ser el medio más proporcionado al fin, la relación de los trabajos profesionales sobre los que deberá exigirse el visado colegial. Dicha relación ha quedado reducida a nueve actividades y se halla relacionada en su artículo 2.

En conclusión:

²¹ En el expediente CNC S/0002/07, Consejo Superior de Arquitectos de España, que se resolvió mediante terminación convencional, se analizó el acuerdo restrictivo adoptado por el Consejo según el cual los estudios de seguridad y salud debían ser firmados por un arquitecto o un arquitecto técnico, debiendo denegarse el visado en caso de estar suscritos por otros técnicos. Mediante la terminación convencional se resolvió el asunto acordando que los estudios podrían llevar la firma de cualquier técnico competente de acuerdo a sus competencias y especialidades.



-el Colegio únicamente podrá visar los trabajos profesionales que voluntariamente le soliciten los clientes y aquellos que por estar incluidos en la relación del Real Decreto resultan de visado obligatorio.

b. El coste

35. El artículo 15.5 de los ECOITIA incluye entre los recursos económicos ordinarios del Colegio el porcentaje que por derecho de visado de trabajos profesionales señale el Colegio.

En relación con el coste de los visados recordar que el artículo 24.i de la LVC Colegios ha establecido que en los supuestos en que el visado sea preceptivo su coste deberá ser razonable, no abusivo ni discriminatorio, así como que su coste deberá hacerse público por el Colegio.

E. Competencia desleal de los colegiados entre si

36. La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal vigente en nuestro sistema contiene unas prohibiciones muy concretas. De entre ellas cabe destacar la cláusula general de su artículo 4 que establece que **“en las relaciones con consumidores y usuarios se entenderá contrario a las exigencias de la buena fe el comportamiento de un empresario o profesional contrario a la diligencia profesional, entendida ésta como el nivel de competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme a las prácticas honestas del mercado, que distorsione o pueda distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio** o del miembro medio del grupo destinatario de la práctica, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores.” Junto con esta cláusula general, tan solo pueden considerarse desleales las prácticas tipificadas en los artículos 5 a 31 de la citada norma. Respecto de la publicidad, tan solo se pueden reputar desleales las consideradas ilícitas por la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

37. En los ECOITIA la cuestión se regula en el artículo 9. ñ:

Artículo 9. Las funciones generales del Colegio.

Son funciones generales propias del Colegio:

ñ. Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo y la competencia desleal, mediante el ejercicio de las acciones previstas por el ordenamiento jurídico.

38. Respecto de este precepto cabe señalar que la referencia genérica a la “competencia desleal”, término empleado comúnmente con un contenido sensiblemente más amplio que el recogido en la Ley, podría facilitar la aparición de restricciones de la competencia.

Dados los cambios normativos que han tenido lugar en estas cuestiones y que no tienen por qué ser conocidos por los miembros del Colegio, se recomienda incluir en los ECOITIA una referencia expresa a los muy escasos tipos de la Ley de Competencia desleal que podrían verse afectados por las prácticas profesionales.



Debe tenerse especial cuidado en no incluir elementos que establezcan o favorezcan el establecimiento de honorarios mínimos, la coordinación de honorarios o una restricción de su libre determinación ni que establezcan o favorezcan limitaciones a las comunicaciones comerciales de los profesionales.

Además, debe extremarse la vigilancia sobre el desarrollo y uso de este precepto ya que, tal como hemos comentado, el sometimiento a la LDC no se limita al literal de los Estatutos del Colegio sino que se extiende a todos los actos y decisiones del Colegio.

F. El Colegio como competencia a los colegiados

39. El artículo 15 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal establece la posibilidad de competencia desleal “por violación de normas”.

Por su parte el artículo 24 LVC dice: “Son funciones propias de los colegios profesionales:

- a) Velar por la ética profesional y por el respeto a los derechos e intereses de los ciudadanos.
- b) Ordenar, en su respectivo ámbito y dentro del marco legal establecido, el ejercicio de la profesión.
- c) Velar por un legal y adecuado ejercicio profesional, así como por el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los colegiados.
- d) Ejercer la potestad disciplinaria en los términos previstos en el artículo 19.
- e) Establecer baremos de honorarios, que tendrán carácter meramente orientativo.
- f) Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales a petición de los colegiados y en las condiciones que se determinen en los estatutos de cada colegio. Emitir informe en los procesos judiciales y en los procedimientos administrativos en los que se discutan cuestiones relativas a honorarios profesionales.
- g) Prestar servicios comunes para los colegiados y, en especial, promover la formación profesional permanente y velar por la efectividad del deber a la misma.
- h) Intervenir, en vía de mediación o arbitraje, en los conflictos profesionales que se susciten entre colegiados, o de éstos con terceros cuando así lo soliciten de común acuerdo las partes implicadas.
- i) Visar los trabajos profesionales de los colegiados cuando así lo establezcan los estatutos del colegio de que se trate o así lo disponga la legislación correspondiente. El visado acreditará en todo caso la autoría del trabajo y la titulación, competencia y habilitación del autor, así como el contenido formal del mismo. El visado no comprenderá los honorarios ni las demás condiciones contractuales, cuya determinación se deja al libre acuerdo de las partes.
- j) Colaborar con la Administración pública en el logro de intereses comunes. En particular, los colegios profesionales:



- Participarán en los órganos administrativos cuando así esté previsto en las normas reguladoras de los mismos y en los términos en ellas establecidos.
- Emitirán los informes que les sean requeridos por los órganos o entes competentes y aquellos otros que acuerden formular a su propia iniciativa.
- Elaborarán las estadísticas que les sean solicitadas.
- k) Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo y la competencia desleal, mediante el ejercicio de las acciones previstas por el ordenamiento jurídico.
- l) Aprobar sus presupuestos y regular las aportaciones de los colegiados.
- m) Designar representantes en cualquier tribunal en que se exijan conocimientos relativos a materias específicas, siempre que se le requiera para ello.
- n) Todas las demás funciones que sean beneficiosas para los intereses profesionales y se encaminen al cumplimiento de los objetivos colegiales.
- ñ) Cualesquiera otras que les atribuya la legislación vigente.”

Finalmente, el artículo 5 LVC establece como requisitos para la colegiación los siguientes: “1. Podrán ejercer una actividad profesional titulada las personas que cumplan los siguientes requisitos:

- a) Estar en posesión del correspondiente título, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1 de esta ley.
- b) No estar en situación de inhabilitación profesional.
- c) No estar incurso en las causas de incompatibilidad o prohibición que establezcan las leyes.
- d) Cumplir, en su caso, con las normas de colegiación.

2. Sólo por ley podrán establecerse requisitos distintos a los anteriores.

40. En los ECOITIA la cuestión se regula en el artículo 15.4:

Artículo 15. Recursos ordinarios.

(...)

4. Los derechos devengados por la emisión de informes o dictámenes periciales que se soliciten al Colegio, bien a instancia de parte, bien de oficio, cuyos honorarios se fijarán discrecionalmente, en cada caso, por la Junta de Gobierno del Colegio.

41. El artículo 15.4 establece como fuentes de financiación del colegio los derechos por la emisión de informes y dictámenes que se soliciten al Colegio. No se recoge en el artículo cuál es la naturaleza de esos trabajos realizados por el Colegio pero, en caso de que sean trabajos de carácter profesional, éstos deberán considerarse propios de sus colegiados, dado que el Colegio carecería de título para llevarlos a cabo como tal. En otro caso el Colegio estaría compitiendo con sus propios colegiados. En efecto, si el Colegio realizara trabajos profesionales propios de la profesión se podrían generar dos consecuencias:



- el Colegio se constituiría en un operador económico, que podría ser oferente referencial de la prestación de dichos servicios, y afectar al acceso directo a los profesionales.
- se favorecería a un operador, el Colegio, en detrimento de los propios colegiados lo que desincentivaría la concurrencia por parte de los colegiados. Este sistema podría generar una situación en que la prestación de ciertos servicios se repartiera internamente a partir de la “captación” del negocio por parte del Colegio.

En consecuencia, salvo que se decida eliminar el artículo 15.4, se propone añadir el siguiente literal: “En ningún caso estos derechos podrán provenir de la prestación por parte del Colegio de servicios propios de la profesión”.

G. Recursos económicos del colegio

42. La Comisión Nacional de la Competencia, en su Informe sobre Colegios Profesionales señala que “desde un punto de vista económico, cuotas de inscripción o colegiación elevadas pueden considerarse, especialmente cuando la colegiación otorga una ventaja significativa para competir en el mercado, como costes hundidos para el colegiado y por tanto configuran una barrera de acceso que tiene el efecto de desanimar, retrasar o impedir la entrada de nuevos competidores, reduciendo la competencia efectiva y, adicionalmente, facilitar la repercusión de los costes de las cuotas de inscripción y colegiación soportados por los colegiados a los usuarios y consumidores”²².

43. En los ECOITIA la cuestión se regula en los artículos 3 y 15 :

Artículo 3. Solicitudes de incorporación.

Quien solicite incorporarse al Colegio Oficial de Peritos, Ingenieros Técnicos y Graduados en Ingeniería de la rama industrial de Álava, dirigirá la oportuna instancia por escrito al Decano, acompañado del Título Oficial o testimonio del mismo o, en su defecto, de estar éste en tramitación, y con carácter provisional, del resguardo de haber abonado las tasas correspondientes de su expedición.

Artículo 15. Recursos ordinarios.

Constituyen los recursos económicos ordinarios del Colegio:

1. Los frutos, rentas, intereses y valores de toda clase que produzcan los bienes y derechos patrimoniales que integren el capital o patrimonio del Colegio.
2. La cuota ordinaria periódica que determine el Colegio.
3. La cuota de incorporación que pudiera establecer el Colegio.
4. Los derechos devengados por la emisión de informes o dictámenes periciales que se soliciten al Colegio, bien a instancia de parte, bien de oficio, cuyos honorarios se fijarán discrecionalmente, en cada caso, por la Junta de Gobierno del Colegio.
5. El porcentaje que por derecho de visado o verificación técnica documental, de trabajos profesionales señale el Colegio.
6. Los beneficios que obtuviera el Colegio de las publicaciones que realice o por matrículas de cursos que pueda organizar o en los que intervenga.

²² Informe de la CNC p. 57.



7. Los derechos que estableciera la Junta de Gobierno por la expedición de cualquier certificación o intervención colegial.

44. Respecto a la cuota de ingreso que se establezca para las solicitudes de incorporación al Colegio debe tenerse en cuenta que debe ser proporcional, no discriminatoria y estar fundada y establecerse en base al coste real de su tramitación. La cuota de ingreso no debe utilizarse ni como fuente de financiación de otros servicios colegiales, ni como vía para desincentivar el acceso a la profesión, máxime cuando se trata de profesiones para cuyo ejercicio sea obligatoria la colegiación.

H. Asignación de encargos a los Colegiados a través del Colegio

45. Los ECOITIA regulan esta función en los artículos 9. j y p:

Artículo 9. Las funciones generales del Colegio.

Son funciones generales propias del Colegio:

(...)

j. Mantener un activo y eficaz servicio de información dentro del ámbito territorial que comprende el Colegio, sobre plazas y trabajos a cubrir, desempeñar o desarrollar por los colegiados, con el fin de lograr el ocupamiento más adecuado, para mayor eficiencia de su labor profesional y rendimiento industrial.

p. Designar representantes en cualquier organismo o tribunal en que se exijan conocimientos relativos a materias específicas.

Artículo 18. Derechos de los colegiados.

e. Disfrutar de los beneficios de elaboración de dictámenes, informes, proyectos, asesoramientos y demás trabajos de su competencia que sean solicitados al colegio y a él se le encomienden por el Turno de Oficio establecido entre los colegiados.

Dicho Turno de Oficio funcionará bajo la vigilancia y control del Colegio, o de la Comisión que al efecto se constituya o le sea retribuida tal función, al objeto de que se lleve a cabo por riguroso orden y en forma totalmente equitativa.

46. Ningún reproche cabe realizar a la redacción de estos apartados, si bien resulta conveniente si quiera advertir que el Colegio deberá tener especial cuidado en la forma de implementar estas funciones, de manera que no incumplan la normativa sobre defensa de la competencia. En el supuesto contemplado en el apartado j, por ejemplo, si el Colegio opta por establecer un sistema de listas o bolsa de trabajo para los colegiados, no deberá contener requisitos de inscripción injustificados que impidan el acceso a todos los profesionales que lo deseen. En cuanto al apartado p, cuando se trate de la elaboración de las listas de peritos judiciales para remitir a los juzgados en cumplimiento del mandato dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por ejemplo, el Colegio no podrá incluir requisitos más allá de lo señalado en dicha Ley, pues de lo contrario estaría estableciendo barreras de entrada no justificadas a los profesionales.

47. Insistimos en que la actuación de los profesionales debe regirse por las normas de defensa de la competencia y que el Colegio no debe limitar la capacidad competitiva



de los profesionales. Así, el Colegio debe abstenerse de realizar actuaciones encaminadas a coordinar la actuación de los profesionales, y no debe ni favorecer ni facilitar la homogeneización de la oferta de los servicios.

El Colegio deberá ser especialmente cuidadoso y no implementar a través de turnos, como el descrito en este apartado, sistemas de reparto de mercado entre su colegiados, turnos que en ocasiones suelen llevar incorporados mecanismos de compensación que son especialmente dañinos, pues desincentivan la competencia entre los profesionales en perjuicio de los clientes. La CNC ha tenido ocasión de pronunciarse sobre los turnos de reparto en diferentes ocasiones ²³.

I. Responsabilidad por trabajos incorrectamente realizados

a. Seguros de responsabilidad civil

48. La Ley Paraguas, en su artículo 21 sobre los seguros y garantías de responsabilidad profesional, determinó que sólo por ley se podrá exigir a los prestadores de servicios la suscripción de un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio²⁴. El mismo artículo establece como criterio para determinar cuándo se exigirá por ley la obligatoriedad, que los servicios que se presten presenten un riesgo directo y concreto para la salud o para la seguridad del destinatario o de un tercero, o para la seguridad financiera del destinatario.

Así, el artículo 12 de la LVC ha establecido el deber de los profesionales titulados de cubrir, mediante el correspondiente seguro, los riesgos de responsabilidad civil en que puedan incurrir a consecuencia de su ejercicio profesional y, en el supuesto de profesiones colegiadas, el Colegio deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del deber de aseguramiento por parte de sus colegiados.

49. Los ECOITIA recogen esta materia en los artículos 19.i y k y 54:

Artículo 19. Obligaciones de los colegiados.

Son deberes u obligaciones de los colegiados:

(...)

²³ Resolución Expte. 639/08 Colegio Farmacéuticos Castilla-La Mancha, donde se trataban los turnos rotatorios para la prestación farmacéutica y Resolución Expte. 562/2003, Colegio Notarial de Bilbao, entre otras.

²⁴ Artículo 21. Seguros y garantías de responsabilidad profesional.

1. Se podrá exigir a los prestadores de servicios, en norma con rango de Ley, la suscripción de un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio en aquellos casos en que los servicios que presten presenten un riesgo directo y concreto para la salud o para la seguridad del destinatario o de un tercero, o para la seguridad financiera del destinatario.

La garantía exigida deberá ser proporcionada a la naturaleza y alcance del riesgo cubierto.

2. se aceptarán a efectos de acreditación los certificados emitidos por éstas.

(...)



i) El colegiado responde directamente por los trabajos profesionales que suscribe, estando obligado a mantener una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los daños derivados de los trabajos que se someten a visado o verificación técnica documental, al menos en la cuantía que tenga fijada el Colegio, en garantía de los intereses de los consumidores y usuarios.

(...)

k) Cubrir, mediante el correspondiente seguro, los riesgos de Responsabilidad Civil en que pudieran incurrir a consecuencia de su ejercicio profesional.

Artículo 54. Tipificación de infracciones.

Las infracciones que pueden ser objeto de sanción disciplinaria por la Junta de Gobierno del Colegio se clasifican en leves, graves o muy graves.

(...)

b) Son infracciones graves:

(...)

b.4. El incumplimiento del deber de aseguramiento, si así viene legal o estatutariamente establecido.

50. A este respecto el Colegio deberá tener presente que:

-la garantía exigida deberá ser proporcionada a la naturaleza y alcance del riesgo cubierto.

-el Colegio no puede en, ningún caso, imponer la adhesión a un seguro o compañía concretos.

51. Toda vez que de conformidad con lo anteriormente apuntado sólo por ley se podrá exigir a los prestadores de servicios la suscripción de un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio, debe suprimirse del apartado el inciso referido al deber de aseguramiento establecido en los estatutos.

b. Responsabilidad del Colegio

52. El artículo 13.3 de la LCP dice que en caso de daños derivados de un trabajo profesional que haya visado el Colegio, el Colegio responderá subsidiariamente de los daños que tengan su origen en defectos que hubieran debido ser puestos de manifiesto por el Colegio al visar el trabajo profesional, y que guarden relación directa con los elementos que se han visado en ese trabajo concreto.

Sin embargo, sobre la responsabilidad subsidiaria del Colegio no se ha recogida nada en los Estatuto, por lo que se aconseja su inclusión.

J. Otras funciones del Colegio

53. El artículo 9.g de los ECOITIA establece, entre otras funciones del Colegio, la siguiente:

**9. Las funciones generales del Colegio.**

Son funciones generales propias del Colegio:

(...)

g. Velar por la adecuada retribución de los colegiados que ejerzan su profesión por cuenta ajena, manteniendo a tal fin estrecho contacto con los negociadores de Convenios Colectivos y normas de desarrollo que les afecten.

54. En cuanto a lo dispuesto en este apartado hay que señalar que la negociación colectiva está regulada en la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 marzo, que señala en su artículo 82 que “Los convenios colectivos, como resultado de la negociación desarrollada por los representantes de los trabajadores y de los empresarios, constituyen la expresión del acuerdo libremente adoptado por ellos en virtud de su autonomía colectiva.” Además, el artículo 87 determina quiénes son las partes legitimadas para negociar los convenios colectivos, entre quienes no se encuentran los Colegios Profesionales.

Pese a que en el apartado referido no se está señalando como función del Colegio el formar parte de la negociación de los convenios colectivos (no podría, de conformidad con el ET), ya que lo que dice es que mantendrá “estrecho contacto con los negociadores”, sería recomendable la supresión del contenido de este apartado pues la normativa laboral ya determina quiénes serán los agentes implicados en la defensa de esos trabajadores

IV. CONCLUSIONES

Primera.- El ejercicio de las profesiones colegiadas se debe realizar en régimen de libre competencia y está sujeto en su totalidad a la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia.

Segunda.- La colegiación plantea cuestiones de competencia no solo en el sentido de acceso al mercado, sino en el de ejercicio de la profesión y puede perjudicar al interés público y a los consumidores. Por tanto tan solo puede admitirse su obligatoriedad (y ello a través de ley) cuando se constate la existencia de intereses públicos afectados que justifiquen la limitación.

Tercera.- En cualquier caso, la ordenación del ejercicio de las profesiones que llevan a cabo los Colegios debe estar inspirada no solo en la defensa de los intereses corporativos sino igualmente en la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, todo ello en congruencia con los intereses y necesidades generales de la sociedad.

Cuarta.- La AVC, mediante el presente informe, plantea la necesaria modificación de los siguientes artículos de los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Peritos Industriales de Álava: 3 (comunicación); 9 (interpretación de dudas sobre honorarios) y 54 (deber de aseguramiento establecido en estatutos). Igualmente recomienda la adecuación o modificación de los artículos 2 (De los colegiados); 4



(Requisitos de Colegiación) y 15 (Colegio como competencia desleal a los colegiados)
, y seguimiento de las sugerencias que se han realizado a lo largo del Informe.

En Bilbao, a 17 de diciembre de 2013

**PRESIDENTE
MARIA PILAR CANEDO ARRILLAGA**

**SECRETARIO
IBON ALVAREZ CASADO**

**VOCAL
NATIVIDAD GOÑI URRIZA**

**VOCAL
RAFAEL ITURRIAGA NIEVA**